

GUARDERÍA ABC: CRIMEN DE ESTADO

Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso García Duarte, asesinado el 5 de junio de 2009 por el Estado mexicano.

Para los niños trabajamos,

Porque los niños son los que saben querer,

Porque los niños son la esperanza del mundo.

José Martí

Se cumplen 9 años de aquel 5 de junio que nunca hubiésemos querido vivir, 9 años de uno de los hechos más dolorosos para nosotros como padres y madres; un día vergonzoso para el Estado mexicano, aunque aún no lo reconozca y no haya pedido perdón a nuestros hijos e hijas. El Estado entonces estaba presidido en el ejecutivo federal por Felipe Calderón y en el de Sonora por Eduardo Robinson Bours Castelo.

Han pasado 9 años de la muerte de 25 niñas y 24 niños; decenas más, sobrevivieron con diferentes grados de lesiones y secuelas, muchas muy graves y de por vida; 9 años de exigir y esperar justicia ante la indiferencia, complicidad e insensibilidad de los que dicen impartirla.

Fue una reacción inmediata, la primera de muchas, salir a las calles a pedir rendición de cuentas y exigir justicia ante estos horribles hechos a un mes de las elecciones para gobernador, diputados y alcaldes de 2009 en Sonora.

El candidato del PRI seguramente gana la elección de no ocurrir el crimen, pero no fue así: los sonorenses votaron en contra del PRI e incluso hasta los priistas votaron por el candidato del PAN como castigo al partido de Bours Castelo uno de los principales responsables de los hechos. El beneficiario fue Guillermo Padrés y el panismo sonorense, a quienes no descarto como posibles responsables del incendio.

Padrés, desde los primeros momentos, lucró con la tragedia, ya que él y su equipo hicieron de inmediato gira en hospitales y funerarias. Ayudar no era su objetivo. Padrés Elías, quien prometiera justicia para nuestros hijos e hijas el 13 de septiembre al tomar protesta como gobernador, se sumó finalmente por su inacción a la larga lista de cómplices: el gobierno estatal y municipal eran priistas; el federal, panista.

La estancia infantil ABC dependía del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución del Estado mexicano que subrogó su obligación por adjudicación directa a particulares de la élite socio-económica de Sonora.

Entre los principales responsables se encuentra la prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, la hoy exonerada socia fundadora de dicha guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien decidió con su otra socia María Fernanda Camou Guillot el lugar donde ubicar la estancia infantil, así como cuánto invertir en el inmueble.

Para ellas, \$50,000 mil pesos es lo que valió la seguridad de nuestros hijos e hijas, ya que tal fue el monto de inicio para operar la guardería ABC, lo que se multiplicó, para ellos, en ganancias, en millones.

Gómez del Campo Tonella, fue exonerada bajo el argumento de que “No tenía deber de cuidado” para con nuestros hijos. O sea que solo podía enriquecerse a costillas de nuestros niños y niñas, pero sin responsabilidad ni obligación alguna. El magistrado Pablo Ibarra le otorgó el sobreseimiento sin considerar que el juez de distrito Raúl Martínez Martínez dijo “que era notoriamente improcedente dicha exoneración”. También lo dijo Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero cuando ellos declaraban esto, todo ya estaba arreglado, seguramente, desde Los Pinos. Al magistrado, luego de dar su veredicto a favor de la prima de la entonces “Primera Dama” de México, el Poder Judicial lo reubicó en otro estado.

Esto es algo que me sigue indignando, pero que no me sorprendió porque precisamente la sumisión de los poderes y la corrupción que eso conlleva fue lo que mató a mi hijo y a los demás niños y niñas.

Tiempo después, otro de los socios de la Guardería ABC se benefició del mal precedente que sentó la prima de la “Primera Dama”. Con los mismos argumentos logró el sobreseimiento Gildardo Urquides Serrano, también rico en dinero gracias a los hijos e hijas de la gente trabajadora.

¿Por qué fue ABC un crimen de Estado?

Es un término que mucha gente no logra o no quiere entender.

Mi hijo Andrés Alonso y sus compañeros son víctimas del Estado mexicano, víctimas de este régimen fallido que ha puesto a nuestro país en luto y desatado un sin fin de tragedias, como Ayotzinapa, Pasta de Conchos, Acteal, Aguas Blancas, News Divine, Atenco, Casino Royale, los feminicidios, ecocidio del Río Sonora y el drama de los millones de mexicanos en pobreza extrema, solo por mencionar algunas.

Todas estas tragedias ocurrieron por las malas políticas de los tres Poderes de la Unión. Ellas ocurrieron en gobiernos del PAN y el PRI. No encuentro diferencia alguna entre uno y otro partido porque tienen la misma forma de gobernar. Esos partidos, con apoyo de otros partidos satélites, han formado un régimen que no tiene respeto por el derecho y que nos tiene en la actualidad a punto del colapso social.

Una prueba contundente de que estos partidos tienen los mismos fines es que en el sexenio de Vicente Fox se empezó a diseñar, obviamente a favor de los empresarios y no de la niñez mexicana, el sistema de subrogación de guarderías del IMSS bajo Santiago Levy, entonces director general. Pero este sistema se expandió más aún en el sexenio de Felipe Calderón, con Juan Molinar Horcasitas en el IMSS, y fue ratificado por Enrique Peña Nieto, quien permitió que este sistema nos siga costando vidas adicionales a las de los 49 de ABC. Peña también prometió justicia para nuestros hijos e hijas al usar la tragedia cuando era candidato; él tampoco hizo nada y se sumó a la larga lista de cómplices.

Cuando ejercí mi derecho a utilizar las mal llamadas guarderías como madre trabajadora y derechohabiente del IMSS, le entregué al Estado mexicano, de cierta manera, la custodia de mi entonces único hijo Andrés Alonso. Le di al Estado mexicano el resguardo de lo más valioso que una madre puede tener: la integridad de su hijo. Y todo con el objetivo de contribuir a la economía familiar, al desarrollo de mi país desde mi función como profesora de preescolar y primaria.

En ese momento desconocía que existía el sistema de subrogación y que en la estancia a la cual ingresaba mi hijo, el IMSS le había dado sus obligaciones a particulares, todos familiares y amigos de funcionarios públicos federales y estatales (algunos propietarios de ABC, incluso, eran funcionarios estatales).

El crimen de la guardería ABC destapó una cloaca de tráfico de influencias y corrupción al arrojar luz sobre el sistema de subrogación, **que desde el derecho constitucional y el interés superior del niño y la niña no cumple con su objetivo: el desarrollo integral de la primera infancia.**

¿Quiénes son responsables?

Es un caso complejo y sencillo a la vez; lo primero, porque son muchos los involucrados, entre funcionarios públicos municipales, estatales y federales coludidos con particulares. Lo segundo, porque todo se resolvería con respetarse el Estado de Derecho, acatar las leyes, que hubiera realmente independencia de los poderes, que no pesara ser familiar, compadre o amigo de los potentados del país o ser uno de ellos. Si así fuera, estoy convencida de que muchos estarían pagando por este crimen de lesa humanidad, pero a 9 años todavía se siguen culpando unos a otros sin que la JUSTICIA brille para nuestros 49 infantes fallecidos, los sobrevivientes y nosotros los familiares.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó, como resultado del ejercicio de la facultad de investigación que ejerció, que todo sucedió debido a un desorden generalizado del sistema de subrogación de las guarderías de IMSS otorgadas a particulares por adjudicación directa a beneficiarios muy cercanos al círculo político-económico del gobierno en turno y sus antecesores. El IMSS, ante la presión social, se vio obligado a publicar la larga lista de los propietarios de las más de 1400 guarderías en el país y los apellidos que sobresalieron fueron Gómez del Campo, Bours Castelo, Calderón, Zavala, Horcasitas, Seldner, Camou y Fox Quesada, entre otros muchos.

Ni el resto del Poder Judicial ni la Procuraduría General de la República tomaron en cuenta la investigación del máximo órgano de justicia de la nación y fueron omisos al no abrir un proceso de investigación a Eduardo Bours, Santiago Levy (quien diseñó este sistema de subrogación), Juan Molinar Horcasitas (que durante su gestión disparó la adjudicación directa a particulares), Daniel Karam (quien fuera director general del IMSS en el momento del crimen), Carla Rochín Nieto (directora general de guarderías en el momento del incendio y persona muy cercana a Margarita Zavala), Ernesto Gándara Camou (quien era presidente municipal de Hermosillo y en lugar de ser investigado fue premiado con una senaduría), Abel Murrieta Gutiérrez (quien fuera Procurador de Justicia del estado en el sexenio de Bours y fue ratificado por Padrés por tres años más; todo indica que la ratificación de Murrieta Gutiérrez fue para controlar los daños del gobierno estatal y la deficiente investigación del caso para favorecer a muchos de los responsables).

Han pasado 9 años de esta infamia cometida por un régimen que me dejó con los brazos vacíos. 9 años de dolor, rabia contenida, impotencia, ira, coraje y un peregrinar de puerta en puerta a fin de lograr justicia para nuestros hijos e hijas. 9 años de que nos asesinaran a 49 niños y niñas y de que dejaran muy lastimados a decenas más. 9 años de que los gobiernos prometen justicia a las víctimas y no cumplen. ¿Será posible que se autocastigaran?

Usted que me lee y yo sabemos perfectamente la respuesta. El humo y el fuego no mataron a los 49, ni tampoco lesionaron a los sobrevivientes. Los mató éste régimen de gobierno fallido, los mató la corrupción y el tráfico de influencias que impera en México.

PATRICIA DUARTE FRANCO

Los mató la ignorancia y el desinterés de nosotros como pueblo que no exige sus derechos y que le agradece al gobierno su deficiente trabajo, como si nos hicieran un favor. Los matamos todos, pero hasta ahora los únicos que estamos pagando somos los padres y madres de los niños y niñas víctimas, nadie más.

A 9 años me preguntan: ¿Qué quieres por justicia ABC? Y se atreven a pedirme que deje descansar a mi hijo. Andrés Alonso descansa al igual que sus compañeros, quienes no descansaremos somos nosotros hasta honrar la memoria de ellos y ellas, es promesa y yo procuro lo más que se pueda cumplirlas, más cuando se las hice a mi hijo muerto arrollada ante su féretro.

Descansaré cuando la Ley 5 de junio se materialice en todo el país, descansaré cuando se respete el interés superior de la niñez, descansaré cuando le demos verdadero sentido a la muerte de mi hijo y sus amiguitos. Para eso falta todavía mucho tiempo, así que el descanso tendrá que esperar.

Esta lucha por la justicia, la memoria y la dignidad es ya parte de mi vida. He aprendido a vivir con ella y eso de cierta manera me hace feliz y me da tranquilidad. Cuando parta de éste plano existencial podré rendir cuentas de frente y viendo a los ojos a mi hijo, Andrés Alonso.

Por último te hago las siguientes preguntas: **¿Y tú qué harías si fuera tu hijo?** ¿Te has puesto por un segundo en mi lugar? ¿La vida de un hijo tiene precio? ¿Preguntas difíciles? Así de difícil es la lucha por Justicia ABC, así de difícil ha sido nuestra vida desde aquel trágico 5 de junio y que muchos se atreven a preguntarnos ¿Qué buscamos? En lo personal quiero que la muerte de mi hijo no sea en vano, quiero honrar su memoria con la seguridad de tus hijos e hijas, quiero que ningún otro infante pase ni siquiera lo más cercano a lo que vivió mi hijo, quiero darle sentido a tanta muerte y dolor.

A 9 años no pierdo la esperanza de lograrlo y hacer conciencia en la sociedad mexicana que necesitamos trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de los niños y las niñas usuarios de estancias infantiles, para eso es necesario el compromiso de todos, cada uno hace la diferencia y podemos sacar adelante este país que ha estado secuestrado por décadas por gobiernos que trabajan para sus propios intereses y no por los de sus gobernados.

¡5 de Junio, ni perdón ni olvido!

#JusticaABC

#ABCNuncaMás

#SomosMemoria